

República de Colombia



Tribunal Administrativo del Meta

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO

Villavicencio, agosto quince (15) de dos mil diecisiete (2017)

RADICACIÓN: 50001-23-33-000-2015-00323-00
DEMANDANTE: JOSE DEL CARMEN MORA MEDINA
DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICIA NACIONAL
M. DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO

Ingresa al despacho, el presente asunto proveniente del Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, en virtud del auto del 9 de noviembre de 2016 que ordenó remitirlo por competencia a esta Corporación.

Ahora bien, el señor **JOSE DEL CARMEN MORA MEDINA**, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario No. DEMET-2014-56 del 9 de septiembre y 9 de octubre de 2014; igualmente solicitó se declare nula la Resolución No. 00129 del 22 de enero de 2015, a través de la cual el Director General de la Policía Nacional, ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.

Como restablecimiento del derecho pidió, que se ordene a la entidad demandada reintegrarlo al cargo de Intendente, con efectividad a la fecha de la sentencia que declare la nulidad de los actos administrativos, igualmente al pago de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos inherentes a su cargo, desde la fecha de su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado al servicio. Igualmente solicitó que se declare que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad y que la condena sea debidamente indexada al momento del pago efectivo.

La demanda inicialmente correspondió a este despacho, el cual en providencia del 25 de septiembre de 2015, declaró la falta de competencia por el factor cuantía y ordenó remitirla a la Oficina de Apoyo Judicial para que fuera repartida entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Villavicencio, correspondiéndole al Juzgado Primero Administrativo.

El despacho judicial, en atención al asunto objeto de controversia, en la etapa de saneamiento realizada en la Audiencia Inicial el 9 de noviembre de 2016, declaró su falta de competencia, por considerar que la misma se encuentra en cabeza de esta Corporación al tenor de lo dispuesto en los numerales 2º y 3º de los artículos 151 y 152 del C.P.A.C.A., al establecer que la sanción disciplinaria impuesta al demandante implica el retiro definitivo del servicio, igualmente fundamentó su decisión en jurisprudencia proferida por el órgano de cierre de esta jurisdicción.

Ahora bien, el despacho no comparte la apreciación del juzgado de origen, por las siguientes razones:

En primer lugar, el numeral 2º del artículo 151 establece que son competencia de los tribunales **en única instancia**, los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que **carezcan de cuantía**, en que se controvertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, **impuestas por autoridades departamentales**, vislumbrándose que estos presupuestos de hecho no se encuentran en el sub lite, pues, de una parte, la demanda tiene cuantía tal como se dejó expresado en parte precedente; de otra parte, se trata de una sanción impuesta por la Policía Nacional, autoridad del nivel central y no departamental y, por último, la sanción de que fue objeto el demandante originó su retiro del servicio.

En segundo lugar, el numeral 3º del artículo 152 del C.P.A.C.A., establece dos situaciones, una, que el tribunal es competente en primera instancia, para conocer los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de 300 s.m.l.m.v., y otra, sin atención a la cuantía, de los actos que se

expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación, en consecuencia, el tribunal solo conoce de asuntos disciplinarios diferentes a los expedidos por los funcionarios de la PGN, cuando la cuantía exceda de 300 s.m.l.m.v., situación dentro de la cual tampoco encaja el presente asunto, pues, de acuerdo con la demanda, la pretensión mayor es de **35 s.m.l.m.v.**

De otra parte, la posición actual del Consejo de Estado, sobre la competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario del Estado, se encuentra consignada en la decisión proferida el 30 de marzo de 2017¹, en la cual, de una parte, determinó que en todos los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho donde se controvierten actos disciplinarios debe estimarse razonadamente la cuantía de las pretensiones, con excepción al de la amonestación, igualmente indicó que los proferidos por órganos diferentes a la Procuraduría General de la Nación son de competencia del Tribunal Administrativo cuando la cuantía supere los 300 s.m.l.m.v.

Para mayor ilustración se traen a colación apartes de dicho pronunciamiento que resultan pertinentes:

“Asimismo, es necesario advertir que, para efectos de la competencia, de las sanciones señaladas anteriormente, la única que, en principio y por regla general, no tiene cuantía es la amonestación escrita.

Las demás sanciones disciplinarias sí tienen cuantía; la multa, por cuanto es una sanción de carácter pecuniario y contiene evidentemente una suma de dinero a cargo del servidor; la destitución e inhabilidad y la suspensión también tienen cuantía, consistente en los salarios y prestaciones dejados de percibir por causa de la desvinculación definitiva o temporal y por la imposibilidad de ocupar algún cargo en la función pública con posterioridad. En estos casos siempre es obligación del demandante, en la demanda, estimar razonadamente el monto de esta cuantía para efectos de establecer el órgano judicial competente.

(...)

En este acápite se establecerá la competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por las autoridades administrativas de los diferentes órdenes, distintas de la Procuraduría General de la Nación, con cuantía, estos son, los que imponen las sanciones de (i)

¹ CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, providencia dictada en el proceso con Radicado 111001032500020160067400 (2836-2016), Demandante: José Edwin Gómez Martínez, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS.

Destitución e inhabilidad general; (ii) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad; (iii) Suspensión, o (iv) Multa.

*De la lectura de los artículos 149 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera que, conforme con el numeral 3 del artículo 152 ibídem, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho **contra actos administrativos que imponen las sanciones** de i) Destitución e inhabilidad general; (ii) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad; (iii) Suspensión, o (iv) Multa, **expedidos por las autoridades administrativas de los diferentes órdenes**, distintas de la Procuraduría General de la Nación, **con una cuantía superior a trescientos salarios** mínimos legales mensuales vigentes, son de competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.*

*Para la Sala, la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 152 citado puede aplicarse perfectamente como una regla especial de competencia para las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se controvierten asuntos disciplinarios con una clara distinción: entre (a) los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación diferentes al Procurador General de la Nación, sin atención a la cuantía, y **(b) los funcionarios de cualquier autoridad (todas las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal) diferentes a la Procuraduría General de la Nación, cuando la cuantía exceda de 300 SMLMV.***

(...)

*Para la Sala, este numeral corresponde claramente a la regla de competencia para demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos, **entre otros**, de carácter sancionatorio². Es importante precisar que esta clase de asuntos, los administrativos sancionatorios, no tiene una disposición expresa, como sí la tienen en este artículo los relativos a contratos, laborales o tributarios, entre otros. En este sentido, y **sin excluir otros asuntos**, puede interpretarse como una disposición completa en materia de competencia para asuntos sancionatorios disciplinarios, así: para las sanciones disciplinarias, con cuantía, emanados de cualquier autoridad, y, sin atención a la cuantía para las sanciones disciplinarias expedidas por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes del Procurador General de la Nación.*

La segunda instancia de estos asuntos son de competencia del Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

*Coherente con lo anterior, cuando se trate de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias, con cuantía inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedidos por autoridades de cualquier orden, sea nacional, departamental, distrital o municipal, **conocerán los jueces administrativos en primera***

² Vb. Gr. La Sección Cuarta del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez mediante auto del 1 de octubre de 2013, Exp. 2013-00290-00 (20246) precisó que en materia tributaria la regla de competencia era clara cuando la pretensión atacaba únicamente los actos administrativos que imponían una sanción, sin que se discutiera sobre el monto, asignación o asignación de impuestos, tasas o contribuciones. Esta regla de competencia estaba dada por el artículo 152-3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

instancia, conforme con el numeral 3 del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (...)

En segunda instancia conocerán los tribunales administrativos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Resaltado fuera de texto)

Atendiendo la normatividad aplicable y la interpretación jurisprudencial reseñada, encuentra este despacho que el presente asunto no es de conocimiento de esta Corporación, en atención a que la pretensión mayor, esto es, la suma de **\$9.573.515.00.** solicitada por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, no supera la cuantía establecida en el numeral 3º del artículo 152 del C.P.A.C.A., que para la fecha de presentación de la demanda, año 2015, ascendía a \$32.217.500, de manera que, son los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Villavicencio los competentes para tramitarlo en primera instancia por el factor cuantía, en consecuencia, se ordenará la devolución del expediente al Juzgado Primero Administrativo Oral de éste circuito.

En consecuencia, se **RESUELVE:**

PRIMERO: Declarar la falta de competencia para conocer del asunto de la referencia por razón de la cuantía, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER por secretaría el expediente al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: Por Secretaría, déjese las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HECTOR ENRIQUE REY MORENO
Magistrado.-